

El terremoto que desenmascaró al interinato

Antonio De La Cruz

Director Ejecutivo

30/Jun/2026

Hay terremotos que destruyen edificios y hay terremotos que destruyen relatos. Los primeros aparecen en los registros geológicos; los segundos quedan inscritos en la historia política. La diferencia radica en que un desastre natural puede derribar puentes, hospitales y viviendas, pero solo una crisis institucional es capaz de revelar si detrás de esas estructuras existía realmente un Estado o apenas la apariencia de uno.

En las primeras horas posteriores a una catástrofe, la legitimidad deja de depender de discursos, símbolos o ceremonias. Se mide en minutos. En la rapidez con la que llegan los rescatistas, en la coordinación de los hospitales, en la circulación de la información y en la capacidad para convertir el caos en orden. El monopolio legítimo de la autoridad ya no se expresa mediante leyes o decretos, sino mediante la organización efectiva de la supervivencia.

Ese es el verdadero examen que enfrenta cualquier gobierno cuando la naturaleza golpea.

En Venezuela, el terremoto ha expuesto una paradoja que rara vez aparece con tanta claridad. La magnitud del desastre no solo puso a prueba la resistencia de las infraestructuras; también sometió a evaluación la arquitectura misma del poder. Cuando familiares ingresan por iniciativa propia a edificios colapsados para buscar sobrevivientes, cuando voluntarios improvisan operaciones de rescate y cuando múltiples actores intentan coordinar ayuda sin una dirección visible, el problema deja de ser exclusivamente sísmico. Se convierte en una crisis de gobernanza.

Toda emergencia requiere un centro de gravedad institucional. Alguien debe decidir prioridades, asignar recursos, integrar capacidades y comunicar objetivos comunes. Sin ese núcleo organizador, incluso la ayuda más abundante pierde eficacia. Los equipos llegan, los insumos existen y la solidaridad se multiplica, pero la ausencia de una estructura unificada transforma la cooperación en fragmentación.

La consecuencia más inmediata no es solamente la lentitud. Es la incertidumbre.

Cuando la información oficial resulta insuficiente o inconsistente, la sociedad llena inevitablemente ese vacío. Circulan rumores, proliferan versiones contradictorias y las decisiones individuales sustituyen a las decisiones colectivas. En una emergencia, la comunicación deja de ser un accesorio político para convertirse en infraestructura crítica. Informar también salva vidas porque organiza expectativas, reduce riesgos y coordina comportamientos.

La psicología de las pérdidas extremas agrava todavía más este fenómeno. Personas que han perdido familiares, viviendas y certezas modifican radicalmente su percepción del riesgo. Acciones que en circunstancias normales parecerían impensables —entrar entre escombros inestables, ignorar advertencias o improvisar rescates— pasan a ser completamente racionales desde la perspectiva de quien siente que ya no tiene nada más que perder. Lo que desde afuera parece imprudencia, desde adentro constituye la única oportunidad imaginable.

La verdadera pregunta, entonces, no es por qué la población actúa así. La pregunta es por qué el Estado tutelado no logra ofrecer una alternativa suficientemente organizada para evitar que esa desesperación se convierta en una segunda tragedia.

Toda crisis también posee una dimensión psicológica colectiva. Durante años, las instituciones chavistas han proyectado una imagen de estabilidad y control social. Esa imagen constituye una máscara compartida que ha permitido a la sociedad creer que existe una estructura capaz de responder cuando llegue el momento decisivo. Los dos terremotos rompieron inmediatamente esa máscara. Bajo ella aparecieron las capacidades reales, las fortalezas acumuladas y, sobre todo, las debilidades que permanecían ocultas mientras la rutina cotidiana permitía disimularlas.

Las crisis no crean esas fragilidades. Simplemente las vuelven visibles.

En ese contexto surge una distinción decisiva entre autoridad formal y autoridad funcional. La primera deriva del cargo; la segunda, de la capacidad para resolver problemas concretos. Ambas suelen coincidir en tiempos normales. En este momento están separadas. El interinato trata de mantener las atribuciones legales aunque ha demostrado no poseer la capacidad operativa indispensable para coordinar rescates, movilizar recursos o integrar cooperación nacional e internacional.

Cuando esa separación se profundiza, la legitimidad del interinato comienza a desplazarse silenciosamente desde la investidura hacia la eficacia.

Esa dinámica alimenta interpretaciones según las cuales un Estado puede conservar plenamente su soberanía jurídica mientras depende crecientemente de capacidades externas para ejecutar funciones esenciales de estabilización. No implica una transformación constitucional ni una pérdida automática de independencia, sino una metáfora útil para describir escenarios donde la asistencia internacional deja de ser complementaria y pasa a convertirse en un componente estructural del funcionamiento estatal.

La atención pública también experimenta una transformación profunda. Antes del terremoto, el debate giraba alrededor de la transición. Después del terremoto, la conversación cambia de eje. La supervivencia desplaza a la ideología. La logística sustituye a la retórica. Los ciudadanos dejan

de preguntar quién tiene razón para comenzar a preguntar quién puede rescatar sobrevivientes, distribuir alimentos, organizar hospitales, y abrir carreteras,

La naturaleza reorganiza las prioridades nacionales con una velocidad que ningún proceso electoral consigue igualar.

Toda historia necesita un conflicto. En esta, el protagonista no es el interinato ni las fuerzas democráticas. Es una sociedad intentando salvar vidas mientras enfrenta obstáculos derivados de la desorganización institucional. Los aliados aparecen en forma de rescatistas, voluntarios, médicos, ingenieros y cooperación internacional. El antagonista no es únicamente el terremoto. También lo es la incapacidad para transformar recursos dispersos en una respuesta integrada.

Esa diferencia resulta fundamental.

Los terremotos pertenecen a la geología. Las catástrofes pertenecen a la política pública, al interinato.

Al final, la pregunta decisiva no será cuántos edificios colapsaron, sino cuántas lecciones sobrevivieron. Las sociedades que aprenden fortalecen sus instituciones antes de la próxima emergencia. Las que no aprenden convierten cada desastre en una repetición del anterior.

Porque la naturaleza nunca decide quién gobierna.

Solo revela, con una honestidad implacable, si realmente existe un Estado capaz de proteger a quienes viven bajo su autoridad.